

80110-

Bogotá

Doctor
JUAN CARLOS ECHEVERRY

Ministerio de Hacienda
Carrera 8 # 6 C- 38

Doctora
ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR

Directora
Departamento Administrativo de la Función Pública
Carrera 6 No. 12-62

Doctor
FEDERICO RENGIFO VELEZ

Director
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Calle 7 No 6 - 54
Ciudad

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 10-02-2012 03:44

Al Contestar Cite Este No.:2012EE7790 O 1 Fol:3 Anex:0

ORIGEN: 635 - DESPACHO DEL CONTRALOR/MORELLI RICO SANDRA

DESTINO: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/FEDERICO RENGIFO VELEZ

ASUNTO: FUNCION DE ADVERTENCIA REFORMA DEL ESTADO

OBS: NO. 34/ PROYECTO LIGIA HELENA BORREERO - C.D. GEST

Asunto: Función de Advertencia
Reforma del Estado

Respetados doctores,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación".

La Contraloría General de la República, en defensa de los intereses patrimoniales del Estado, debe propender por la eficiencia en el ejercicio de la función fiscalizadora, en virtud de lo cual, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración debe hacerse en forma técnica y oportuna, no solo con el fin de resarcir el posible daño al patrimonio estatal, sino advertir y reducir los riesgos que pueden menoscabar el patrimonio público.

De esta forma, la Contraloría General no solo está en la obligación legal de pronunciarse en forma posterior y selectiva sobre la gestión y resultados del manejo de los recursos y bienes públicos; sino que debe advertir con criterio técnico, preventivo o proactivo, a los gestores públicos, del posible riesgo que se pueda presentar por conductas que afecten el patrimonio público y el cumplimiento de los fines del Estado al que se destina dicho patrimonio.

El Decreto Ley 257 de 2000 dispone que para el cumplimiento de su misión y en desarrollo de las normas consagradas en la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría General de la República: *"7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados."* (Art. 5)

La Contraloría General de la República ha venido haciendo seguimiento a las diferentes reformas en la estructura del Estado. En la última, la del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), donde se tomó la decisión de la fusión, escisión, reorganización, liquidación, creación de algunas entidades, integración de sectores administrativos, asignación de funciones y competencias, entre otras, se ha advertido el funcionamiento de entidades con similares objetivos, de manera paralela, mientras que la antigua se liquida y la nueva se pone en funcionamiento, con riesgo de duplicidad en costos y esfuerzos.

Se ha advertido que la puesta en marcha de las nuevas entidades no cuenta desde el comienzo con estructuras administrativas y presupuestos adecuados para acometer los nuevos retos, generando la reestructuración continua de las plantas de personal constituidas para el funcionamiento de las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reorganizadas; la contratación permanente de consultorías para justificar la creación de cargos, y la celebración de contratos de prestación de servicios para satisfacer las necesidades de personal. Lo anterior puede implicar contingencias fiscales e ineficiencia administrativa, tal como ha ocurrido en anteriores reformas.

Igualmente se ha observado que la supresión de cargos o la liquidación de personal de las entidades reestructuradas o suprimidas o los cambios en la naturaleza jurídica de las vinculaciones de los servidores públicos (Trabajadores Oficiales a Emplados Públicos) ha generado innumerables y cuantiosísimas demandas al Estado, así como retrotraer situaciones jurídicas y reliquidar salarios y prestaciones sociales cuya cuantificación aún no se conoce con exactitud y cuya evaluación debería hacerse de manera integral por parte del Gobierno Nacional.

La reforma recientemente expedida por el Gobierno Nacional, si bien se ha dicho que su intención no es fiscalista sino que busca la eficiencia en la gestión pública y adecuar la administración pública a la realidad del país para fortalecer su capacidad de respuesta ante aspectos como la seguridad democrática, finanzas públicas, estabilidad y crecimiento económico, ha implicado la supresión, transformación, reorganización o escisión de algunas entidades, así como la creación de agencias e integración de sectores, generando un cambio importante en los esquemas de gestión y contratación, desde el punto de vista jurídico y funcional.

No obstante, la puesta en marcha de las mismas, implica una transición en la que necesariamente van a convivir, durante un tiempo, entidades con similares funciones.

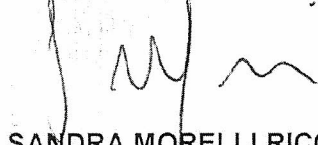
Dado lo anterior, es importante advertir la necesidad de generar estructuras administrativas, plantas de personal y presupuestos, que permitan, de una manera eficiente, la puesta en marcha de estas entidades y así suplir las necesidades surgidas con la renovación y modificación de la estructura de la Administración Pública y que permitan a su vez brindar información adecuada a los usuarios o destinatarios de los servicios o de la función pública correspondiente, para efectos de no incurrir en los costos fiscales que conllevaría repetir esquemas de estructuras parciales, consultorías costosas y permanentes y contratación vía prestación de servicios en contravía a lo dispuesto en la ley y en la sentencia C-614/09 de la Honorable Corte Constitucional.

Experiencias como la de la reorganización de la seguridad social, en el caso del Instituto de Seguros Sociales (ISS), entidades de salud, pensiones, riesgos profesionales y la escisión de Empresas Sociales del Estado, imponen la necesidad de evaluar el costo beneficio obtenido, así como los tiempos que la administración pública se ha tomado para consolidar dichas reformas, experiencias que a todas luces, en materia de eficacia y eficiencia, deben servir para la planeación y puesta en marcha de la reforma que el Gobierno actual adoptó.

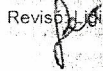
Muestra de esto es la función de advertencia que recientemente hizo la Contraloría General de la República sobre la optimización organizacional en el caso de Positiva Compañía de Seguros S.A., en relación con el riesgo de pérdida de los recursos involucrados en el replanteamiento de la estructura y planta de personal que implicó diversas contrataciones a lo largo de los últimos cinco años, sin lograr cumplir con el objetivo de contar con una estructura óptima y adecuada a su objeto social.

Finalmente, la CGR le solicita que a la mayor brevedad posible remitan un plan de acción detallado para lograr la funcionalidad de dicha reforma.

Atentamente,



SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la República

Revisó:  Helena Borrero Restrepo
Contralora Delegada para el Sector
Gestión Pública e Instituciones Financieras

Proyectó: Carolina Sánchez Bravo 